

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, quince (15) de junio de dos mil veintiuno (2021)

DEMANDANTE	: NIXON ORREGO ACEVEDO
DEMANDADO :	: PORVENIR S.A
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-021-2017-00507-01
RADICADO INTERNO	: 105-21
DECISIÓN	: CONFIRMA SENTENCIA
ACTA NÚMERO	: 148

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el recurso de apelación en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con el **Decreto 806 de 2020**: “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, artículo 15, la sentencia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se DECLARE que presenta una pérdida de capacidad laboral del 66.01% de origen común con fecha de estructuración del 05 de febrero de 2015 y que como consecuencia se reconozca y pague la pensión de invalidez de manera retroactiva debidamente indexada y con los intereses moratorios y las costas del proceso.

Como fundamentos facticos de lo anterior se indica que cuenta con 45 años de edad, es técnico en matemáticas y dibujo técnico, operario de producción en empresa metalmecánica desde hace 21 años. que según se evidencia de

la historia clínica en la actualidad presenta un cuadro de 6 años de evolución de edema de hombro derecho dominante dolor intenso y en virtud de sus padecimientos se le diagnostico síndrome del manguito rotador, el cual fue intervenido quirúrgicamente en la clínica bolivariana en el año 2010 por artritis séptica sin antecedente traumático. Que el 25 de febrero de 2014 se le colocó prótesis de hombro derecho que actualmente lo tiene limitado con hombro congelado y lesión de nervio axilar y subescapular derecho. Que según se registra en la historia clínica en la actualidad se encuentra en tratamiento por psicología y psiquiatría y síndrome vertiginoso. Que de acuerdo a las anotaciones de la historia clínica cuenta con los siguientes diagnósticos:

- Trastorno depresivo mayor
- Rasgos disfuncionales de personalidad
- Sincope mediado neuralmente
- Lesión nervio axilar y subescapular derecho
- Dolor crónico intratable
- Complicación prótesis articular interna
- Infección debido a prótesis articular interna
- Hipogonadismo
- Síndrome del túnel del carpo moderado derecho.

Que no obstante los diagnósticos anteriores porvenir S.A mediante dictamen del 05 de febrero de 2015 le definió la PCL del 16.69% de origen común y con fecha de estructuración del 05 de noviembre de 2014 solo en relación con las deficiencias de prótesis de hombro derecho y restricción AMAS.

Que la junta regional de calificación de invalidez mediante dictamen Nro 54168 del 14 de mayo de 2015, le calificó un PCL del 50.66% de origen común con fecha de estructuración del 16 de marzo de 2012 en relación con los diagnósticos de **artritis piogenea no especificada, capsulitis adhesiva del hombro, otro dolor crónico, síndrome de túnel del Carpio y dedo de gatillo.**

Y que la junta nacional mediante dictamen Nro 98555137-2195 del 02 de diciembre de 2015 modificó la calificación de la junta regional y la definió en un PCL del 34.68% de origen común con fecha de estructuración del 23 de abril de 2015 en relación con los diagnósticos de **artritis piogenea no especificada, capsulitis adhesiva del hombro, otro dolor crónico, síndrome de túnel del Carpio y dedo de gatillo.**

Que en razón de los anteriores dictámenes se sometió a una valoración del daño corporal y perdida de capacidad laboral la cual mediante dictamen Nro 1200 del 11 de agosto de 2016 determinó una PCL del 66.01% de origen

común con fecha de estructuración del 05 de febrero de 2015 en relación con los siguientes diagnósticos.

- Trastorno depresivo mayor
- Rasgos disfuncional de personalidad
- Sincope mediado neuralmente
- Lesión nervio axilar y subescapular derecho
- Dolor crónico intratable
- Complicación prótesis articular interna
- Infección debido a prótesis articular interna
- Hipogonadismo
- Síndrome del túnel del carpo moderado derecho.

CONTESTACION DE LA DEMANDA

La demandada Porvenir S.A dio contestación a la demanda manifestando en síntesis que se opone a la pretensión de la parte actora de declarar que cuenta con un 66.01% del PCL por cuanto no existe prueba para ello y menos aun para dejar sin valor el dictamen emitido por la junta nacional y que por lo tanto si lo que el demandante pretende es evidenciar un aumento a través del paso del tiempo de las condiciones actuales de salud que no eran las que se presentaban para el momento en que se practicaron las calificaciones por parte de Seguros Alfa, Junta Regional y Nacional lo conducente es solicitar una revisión del dictamen a través de una nueva evaluación. Se opone además al dictamen presentado por el Dr, Luis Armando Cambas. En virtud de lo anterior, y al considerar que no se encuentra probada la PCL laboral suficiente para la pensión de invalidez propone como excepciones petición antes de tiempo, falta de causa para pedir, existencia de la obligación, buena fe, incompatibilidad entre auxilio por incapacidad pagado por la EPS o la AFP y la pensión de invalidez, prescripción y la innominada.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 23 de marzo de 2021, el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, ABSOLVIO a PORVENIR de las pretensiones incoadas por el señor NIXON ORREGO ACEVEDO. DECLARO probada la excepción de no haberse desvirtuado los criterios de valoración de la PCL determinados por la JNCI. CONDENO en costas al demandante, y fijó como agencias en derecho la suma de medio salario mínimo legal mensual vigente.

IMPUGNACIÓN

El apoderado de la parte demandante presenta recurso de apelación manifestando que no se encuentra de acuerdo con el fallo de primera instancia por cuanto se encuentra acorde a lo dicho por el Dr Cambas dentro de la ratificación del dictamen en la audiencia donde este es enfático en determinar que terminado el tramite administrativo conforme a la norma debía realizarse una calificación con la norma vigente al momento de realizarse el dictamen. Dice además que esta es la manera en que debe ser interpretado el inciso segundo del artículo 05 del Decreto 1507 de 2014 y es que en el presente caso administrativamente hablando ya no quedaba tramite alguno, procedimiento o examen o recurso que interponer frente a los dictámenes inicialmente emitidos, es decir, que el trámite administrativo había finalizado completamente.

Que además existían patologías como lo dijo el Dr Cambas que no fueron consideradas en su momento en la calificación por parte de las juntas y que existían unas patologías nuevas que surgieron con posterioridad a la calificación de estas, y que por lo tanto en consecuencia indica que dicha apoderada es mas de la opinión del Dr cambas en el sentido de establecer que se requería una nueva calificación y que esta debía realizarse conforme al manual vigente al momento de realizarse la calificación como lo dispone igualmente el artículo 41 de la ley 100/93, y el decreto 1562 de 2012 y demás normas que regulan el sistema de pensiones.

Que además considera que no se establece una dificultad compleja al momento de realizar el comparativo entre ambos manuales, pues cree que las diferencias en cuanto a los cuestionamientos que realizó el juez al momento del interrogatorio al perito fueron resueltas con claridad por parte del Dr, Cambas, que para las deficiencias se trata igual en un manual y en el otro, precisando que estableció que la diferencia en cuanto a calificación porcentual respecto de las deficiencias era en lo tocante a estas nuevas patologías y a las que no habían sido tenidas en cuenta por la junta nacional en su momento. Que en cuanto a los ítems de minusvalías y discapacidades se hizo la relación exacta de con que estaba relacionado en el nuevo manual cada una de ellas. Que si bien existe un cambio en la calificación o en los porcentajes en estos roles también es cierto que no es un aumento abismal en cuanto a la misma. Solicita al tribunal mirar y establecer a lo que hace referencia el Dr Cambas dentro de la ratificación del dictamen en lo relacionado a la experticia de la

junta nacional precisando que dicho dictamen tiene sus errores también, no debiendo dársele validez alguna dentro del proceso porque el mismo carece de un elemento importante establecido por la sentencia C 425 de 2005, y es la calificación integral del demandante, por lo que considera que la entidad al momento de expedir el dictamen omite la calificación integral y así lo determinó también el Dr Cambas quien indicó que al momento de ser calificado por la junta regional ya el contaba con el grado de invalidez y que dicha junta regional si hizo una calificación integral donde para el momento obviamente no estaban las otras patologías que surgieron con posterioridad a la calificación pero se establece con claridad el error de la junta nacional. Por lo anterior solicita se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a las pretensiones de la demandada que en momento alguno era la nulidad del dictamen de la junta nacional sino el determinar a la actualidad la PCL del demandante la cual queda demostrada con el dictamen del Dr, Cambas.

ALEGATOS DE CONCLUSION.

El apoderado de la parte demandante presenta alegatos de conclusión manifestando que conforme lo expuesto en la sustentación del recurso de apelación formulado en contra de la sentencia de primera instancia, solicita REVOCAR la sentencia de primera instancia y en su lugar, reconocer la prestación económica de la pensión por invalidez al demandante.

El apoderado de la parte demandada Porvenir S.A presenta alegatos de conclusión manifestando que dicha entidad se encuentra conforme a la sentencia emitida en primera instancia al no existir soporte probatorio, legalmente aportado al proceso y tramitado conforme a los principios fundamentales del debido proceso y del derecho de defensa, a través del cual se pueda aseverar que la PCL del demandante es del 66.01% con FE 5/02/2015, como se pretende.

Que con tal declaración pretende la parte demandante de forma implícita dejar sin efecto el dictamen practicado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez al actor, ello por la simple discordancia frente al porcentaje de PCL asignado por la Junta Nacional al señor ORREGO ACEVEDO, lo cual no es razón atendible para “declarar la ineficacia o nulidad” de un dictamen que sólo es la culminación de un procedimiento administrativo, en el cual intervinieron en forma previa el Grupo Interdisciplinario de Seguros de Vida Alfa S.A. y la Junta Regional de Calificación de Invalidez.

que además el supuesto nuevo “dictamen” que se le realizó al actor, carece de los fundamentos de índole legal y médicos necesarios para desechar los ya practicados, como lo concluyó el Juez de instancia al cuestionar los motivos por los que el nuevo “dictamen” aportado por el actor se hubiese realizado con un manual no vigente (Decreto 1507 de 2014), cuando debió haberse realizado con el manual que fue utilizado tanto por PORVENIR S.A. como por la JRCI y JNCI (Decreto 917 de 1999). Así las cosas, se solicita confirmar la sentencia absolutoria de primera instancia.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Conforme al recurso de apelación interpuesto el problema jurídico en esta instancia se centra en determinar si para el caso en concreto se demostró una pérdida de capacidad laboral superior al 50% y en consecuencia si hay lugar a la pensión de invalidez solicitada, a los intereses moratorios y las costas del proceso.

Por lo anterior, el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden:

1. Del estado de invalidez y los requisitos para acceder a la pensión de invalidez en el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.

Por su parte, en el sistema general de pensiones, el artículo 38 de la ley 100 de 1993, consagra con respecto al estado de invalidez que “se considera inválida la persona que, por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.

Y según el artículo 39 de la referida normativa, tendrán derecho a la pensión de *invalidez*, el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado *inválido* y acredite las siguientes condiciones:

- “1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración*
 - 2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma,*
- PARÁGRAFO 1o. Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.*

PARÁGRAFO 2o. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años”.

Partiendo de lo anterior, según la normativa transcrita para que una persona tenga derecho a la pensión de invalidez requiere ser calificado por la entidad competente con un 50% o mas de PCL y tener cotizadas 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de la estructuración.

2. De la calificación integral.

En cuanto a la forma en que se debe realizar las calificaciones, el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, que modificó el artículo 52 de la Ley 962 de 2001, el cual había modificado el artículo 41 de la L 100 de 1993, señala:

*“...Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. **En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación** deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales.*

El acto que declara la invalidez que expida cualquiera de las anteriores entidades, deberá contener expresamente los fundamentos de hecho y de derecho que dieron origen a esta decisión, así como la forma y oportunidad en que el interesado puede solicitar la calificación por parte de la Junta Regional y la facultad de recurrir esta calificación ante la Junta Nacional. (...).”

Por su parte, tanto el literal c), del artículo 4º y el artículo 7º del Decreto 917 de 1999 como el decreto 1352 de 2013 se propende por la realización de la **CALIFICACIÓN INTEGRAL**, al consagrarse en el último de ellos:

*“ARTICULO 52. **Procedimiento aplicado para la calificación integral de la invalidez.** Las solicitudes que lleguen a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y la Nacional por parte de las Administradoras de Riesgos Laborales o las Administradoras del Fondo de Pensiones, las Entidades Promotoras de Salud o las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, las Administradoras del Sistema General de Pensiones, **deben contener la calificación integral para la invalidez** de conformidad la sentencia C-425 de 2005 de la Honorable Corte Constitucional y su precedente jurisprudencial, esto*

mismo aplicará para el correspondiente dictamen por parte de las Juntas de Calificación de Invalidez Regional o Nacional.”

Lo anterior ya venía siendo decantado por la jurisprudencia constitucional como se puede advertir en el Decreto 1352 de 2013, desde la sentencia C 425 de 2005, en las que se ha advertido que la calificación del estado de invalidez cuando existan varias patologías, tanto de origen común y profesional, debe realizarse una calificación integral teniendo en cuenta ambas patologías derivadas de accidente o enfermedad, al propender por un estado de invalidez material y no formal, refiriendo de esta forma que un individuo es materialmente inválido si su porcentaje de invalidez es igual o superior al cincuenta (50) por ciento, independientemente de si las patologías que lleven a este monto de pérdida de capacidad laboral sean de origen común, o laboral, o de ambas.

Concordado con lo anterior debe precisarse que una cosa es la exigencia de realizar una calificación integral con todas las patologías tanto de origen común como profesionales existentes al momento de la calificación, y otra muy diferente como lo arguye la parte actora, es tratar bajo el supuesto de una calificación integral pretender incluir patologías o diagnósticos que no estaban presentes para el momento de la calificación como se vera mas adelante.

En orden de lo anterior debe advertirse que en lo que respecta al porcentaje de PCL, tratándose de la carga probatoria, el artículo 164 del C.G.P, que por analogía se aplica en el proceso laboral, consagra el principio de la necesidad de la prueba, según el cual toda decisión debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. En el mismo sentido el artículo 167 ibídem, consagra el principio de la carga de la prueba, conforme al cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Para el caso en concreto no existe discusión que el señor NIXON ORREGO ACEVEDO fue calificado por Seguros Alfa S.A, mediante dictamen del 05 de febrero de 2015 donde se le definió una PCL del 16.69% de origen común y con fecha de estructuración del 05 de noviembre de 2014 solo en relación con las deficiencias de prótesis de hombro derecho y restricción AMAS. (fls 220 y 221).

Que la junta regional de calificación de invalidez mediante dictamen Nro 54168 del 14 de mayo de 2015, (fls 223 a 227), le calificó un PCL del 50.66% de

origen común con fecha de estructuración del **16 de marzo de 2012** en relación con los diagnósticos de artritis piogénea no especificada, capsulitis adhesiva del hombro, otro dolor crónico, síndrome de túnel del Carpio y dedo de gatillo.

Y que la junta nacional mediante dictamen Nro 98555137-2195 del **02 de diciembre de 2015** (fls 229 a 234), modificó la calificación de la junta regional y la definió en un PCL del 34.68% de origen común con fecha de estructuración del **23 de abril de 2015** teniendo en cuenta para ello los mismos diagnósticos abordados por la junta regional.

Y en dictamen allegado con la demanda rendido por el Dr, Luis Armando Cambas Zuluaga, (fls 235 a 240) se realizó la calificación de PCL del demandante en un 66.01% de origen común con fecha de estructuración del 05 de febrero de 2015, calificación que partió de tomar en cuenta los diagnósticos de: Trastorno depresivo mayor, rasgos disfuncional de personalidad, síncope mediado neuralmente, lesión nervio axilar y subescapular derecho, dolor crónico intratable, complicación prótesis articular interna, infección debido a prótesis articular interna, hipogonadismo, síndrome del túnel del carpo moderado derecho.

De los anteriores diagnósticos es necesario advertir que algunos de ellos surgieron con posterioridad a la emisión de los dictámenes objeto de controversia en el proceso por Seguros Alfa, la junta Regional y Nacional, tales como, trastorno depresivo mayor, (03 de agosto de 2016), rasgos disfuncionales de personalidad, (03 de agosto de 2016).

Ahora, en atención a las cargas procesales contenidas en los artículos 164 y 167 del C.G.P ya mencionadas, le correspondería a la parte demandante demostrar que existía una pérdida de capacidad laboral mayor a la otorgada en los dictámenes de las Juntas, evento que se considera no se acreditó para el caso en concreto, toda vez que después después de ser valorada en su conjunto las pruebas aportadas al proceso, con base en las reglas de la **sana crítica y la libre formación del convencimiento** (art. 61 del CPL), se considera que no puede acogerse conforme lo pretendido en la demanda el dictamen emitido por el Dr, Luis Armando Cambas Zuluaga a efectos de demostrar la PCL superior al 50% para tener derecho a la pensión de invalidez reclamada por lo siguiente:

El decreto 1507 de 2014 establece con respecto a la vigencia de dicho manual de calificación de invalidez que:

“El Manual Único para la Calificación de Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional entrará en vigencia seis (6) meses después de su publicación; por lo tanto, solo se aplicará a los procedimientos, actuaciones, dictámenes y procesos de calificación del origen y pérdida de la capacidad laboral que se inicien con posterioridad a su entrada en vigencia.

*Los procedimientos, exámenes y práctica de pruebas en el proceso de calificación del origen y pérdida de la capacidad laboral, así como los dictámenes, recursos de reposición y apelación **que se encuentren en curso a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto**, se seguirán rigiendo y culminarán con los parámetros señalados en el Manual de Calificación establecido en el Decreto número 917 de 1999”.*
(subraya de la Sala)

Como dicho decreto fue expedido el 12 de agosto de 2014, quiere decir que 6 meses después que entrara a regir conforme lo indicado sería el 12 de febrero de 2015.

Ahora, el dictamen emitido por Seguros Alfa S.A, donde se le definió una PCL del 16.69% de origen común y con fecha de estructuración del 05 de noviembre de 2014, tiene fecha del **05 de febrero de 2015**, lo que indica que para la fecha en que entró en vigencia el decreto 1507 de 2014 el proceso de calificación del señor Nixon Orrego Acevedo ya había iniciado por lo que conforme a la normativa enunciada se debería seguir rigiendo y se debería culminar con los parámetros del Manual de calificación contenidos en el Decreto 917 de 1999, y no bajo los preceptos del decreto 1507 de 2014 como fue realizado por el Dr, Luis Armando Cambas Zuluaga en dictamen de parte allegado con la demanda razón por la cual no puede tomarse dicho dictamen.

Además del error antes advertido es necesario mencionar que en dicho dictamen se apreciaron y tomaron en cuenta algunas patologías que surgieron con posterioridad a los dictámenes emitidos por seguros Alfa, la junta Regional y la Junta Nacional tales como trastorno depresivo mayor, (03 de agosto de 2016), rasgos disfuncionales de personalidad, (03 de agosto de 2016), razón por la cual se considera como acertadamente se precisó en primera instancia que el demandante debió solicitar una nueva calificación antes las entidades de seguridad social en virtud del cambio de su estado de salud y la aparición de nuevas patologías, y no pretender a través del proceso ordinario dejar sin valor los dictámenes ya emitidos y en firme por la Junta Nacional.

Así mismo es importante mencionar que a la parte demandante se le decretó de oficio dictamen para que fuera rendido por la IPS de la Universidad de Antioquia, sin embargo, dicha prueba no fue allegada para la audiencia de trámite y juzgamiento como se había advertido en la diligencia del artículo 77 del C.P.T y ss.

Además de lo anterior es necesario precisar que en la audiencia de trámite juzgamiento se solicitó al despacho constancia de asistencia a la misma por parte del demandante para llevar a su empleador la justificación de su ausencia en ese día laboral, por lo que se infiere que este para dicha fecha se encontraba laborando, y por ende en ejercicio de su capacidad laboral, por lo que se reafirma la posición de que ante las nuevas condiciones de salud con las que cuenta el actor según las contingencias ocurridas con posterioridad al dictamen emitido por la junta debe solicitar es una nueva calificación como se mencionó, y no pretender a través del presente proceso ordinario y del recurso de apelación interpuesto convalidar el dictamen emitido por el Dr, Luis Armando Cambas con un porcentaje de PCL del 66.01% con la finalidad de tener derecho a la pensión de invalidez, toda vez que como se anotó el mismo no tiene validez al haber sido emitido bajo los preceptos de un decreto no aplicable a la situación del demandante.

Por lo anterior, y dado que la parte no demostró la existencia de una PCL superior al 50% conforme a las pruebas y dictámenes allegados según el análisis realizado, no puede prosperar la pretensión de pensión de invalidez y en consecuencia se debe CONFIRMAR la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín.

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante en la suma de \$454.263 por no haber salido avante el recurso de apelación interpuesto.

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante en la suma de \$454.263 por no haber salido avante el recurso de apelación interpuesto.

Lo anterior se notifica por ESTADOS.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
– SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 103 del 16 de junio de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>